TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA
Sala Civil – Familia

Magistrado Sustanciador:
Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

Ref: Liquidación de sociedad conyugal – Ejecutivo de Mario Ernesto Gómez Ramírez c/. Sonia Patricia Banoy Escobar. Exp. 25307-31-03-002-2019-00096-03 / 2020-00013-01.

Decídese el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra el auto de 8 de junio pasado proferido por el juzgado segundo promiscuo de familia de Girardot dentro del presente asunto, teniendo en cuenta los siguientes,

I.- Antecedentes

En firme la sentencia que aprobó el trabajo de partición presentado dentro de la liquidación de la sociedad conyugal contraída por las partes, pidió el actor, apuntalado en lo dispuesto por el artículo 306 del código general del proceso, librar mandamiento de pago a su favor y en contra de la demandada, por la suma de \$93'858.240, más los intereses de mora, cifra que de acuerdo con el trabajo partitivo le adeudaba la cónyuge, así como decretar el embargo y secuestro en el salario permitido por la ley de los salarios, primas, cesantías, intereses a las cesantías, prestaciones sociales y demás que devengara la demandada como empleada del colegio Fidel Cano del municipio de Tena, petición a la que accedió el juzgado mediante auto de 21 de agosto de 2020.

Habiendo adquirido firmeza la providencia de 18 de marzo del año anterior, por la que se ordenó seguir adelante con la ejecución en los términos del mandamiento de pago, sobre la base de que la demandada notificada por aviso, no formuló excepciones, y aprobadas las liquidaciones del crédito y de las costas, pidió la demandada que en ejercicio del control de legalidad, dispusiera el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre sus prestaciones sociales, aduciendo que de acuerdo con lo previsto en el artículo 344 del código sustantivo del trabajo, aquéllas son inembargables, salvo para los créditos con cooperativas o por pensiones alimenticias.

Mediante el proveído apelado, el a-quo dejó sin valor ni efecto lo relativo al embargo decretado sobre las cesantías y prestaciones sociales de la demandada, haciendo ver que al tenor de la citada norma aquéllas son inembargables y el proceso ejecutivo que se tramita no cuadra dentro de ninguna de las excepciones allí contempladas.

Inconforme con esa determinación, el demandante interpuso recurso de reposición, aduciendo que la decisión de decretar esa medida cautelar cobró firmeza dentro del proceso sin protestas de la demandada, cuando ha podido atacarla a través de los medios que dispone la ley para ello; además, como se trata de una ejecución que se promovió dentro de la liquidación de la sociedad conyugal, debe darse aplicación a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 598 del código general del proceso, que autoriza a las partes a pedir el embargo y secuestro de todos los bienes que puedan ser objeto de gananciales, incluidas las prestaciones sociales, pues éstas se consideran gananciales y nunca ha renunciado a aquéllos.

No obstante, el juzgado mantuvo su determinación tras considerar que ni en el trabajo de partición, ni en los inventarios, fueron relacionadas como activos las prestaciones sociales devengadas por la demandada, por lo que no puede decirse que se trate de la

medida prevista en el citado precepto 598; antes bien, aquélla se pidió dentro del trámite ejecutivo, de modo que su decreto se torna ‘ilegal’, por la restricción que existe en cuanto a su inembargabilidad, máxime si no se incluyó ninguna pensión alimenticia a cargo de la demandada y en favor del demandante; a la par, concedió en el efecto devolutivo el recurso de apelación formulado en subsidio, el cual, debidamente aparejado, se apresta el Tribunal a desatar.

II.- El recurso de apelación

En sustento de la alzada no se ofrecieron oportunamente nuevos argumentos y ésta se soportó en lo blandido en el recurso de reposición elevado.

Consideraciones

Lo primero que ha de relievase es que la competencia del ad-quem para resolver sobre el recurso de apelación está delimitada por los argumentos expuestos por el impugnante al interponer el recurso o los planteados dentro de la oportunidad prevista por el inciso 1° del numeral 3° del artículo 322 del código general del proceso, como se aprecia de la exposición de motivos del citado ordenamiento, ya que ésta, oyendo de cerca los dictados jurisprudenciales decantados en fallos recientes de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, no puede desbordar esos precisos confines de la apelación, naturalmente que si “*el juez de segundo grado no es libre en la definición de los contornos de su competencia, ni puede concretar sin ataduras ‘qué es lo desfavorable al apelante’, para atraer una competencia de la que carece o desdeñar una que nítidamente le ha sido atribuida, no solo por la ley, sino por el acto procesal de parte que le transmite la desazón del litigante frente al fallo*” (Cas. Civ. Sent. de 8 de septiembre de 2009, expediente 11001-3103-035-2001-00585-01), de suerte que ningún pronunciamiento cabe hacer frente a esos memoriales de ‘sustentación’ que el demandante aportó a destiempo (7 de septiembre y 20 de octubre de 2022).

Pues bien. Aunque la jurisprudencia no ha prohijado siempre esa posibilidad del juzgador de acudir al expediente de la “ilegalidad” para enmendar algunas actuaciones judiciales que, de mantenerse, conspirarían contra el principio del debido proceso, pues todo descubre que constituyen un apartamiento grosero de la objetividad de la ley o del proceso mismo, en cuanto con éste puede terminar abriéndose una compuerta que menoscabe la estrictez del principio de especificidad, es un hecho que cuando el acto o las actuaciones acaecidas en el proceso devienen insostenibles, el único remedio al que puede apelarse, en bien de la juridicidad y el acceso a la administración de justicia es el mencionado.

Con mira en este criterio puede decirse, sin atisbos de duda, que la medida correctiva adoptada por el juzgado en este caso, tras detectar la magnitud del error en que incurrió al decretar la medida cautelar solicitada por el ejecutante en relación con las prestaciones sociales de la demandada, está plenamente justificada, circunstancia que de suyo impera confirmar el proveído en que así lo dispuso. Pues con prescindencia de si la ejecutada recurrió o no esa determinación, lo que jamás podría soslayarse es que a voces del artículo 344 del código sustantivo del trabajo, “[s]on inembargables las prestaciones sociales, cualquiera que sea su cuantía.

“2. Exceptúanse de lo dispuesto en el inciso anterior los créditos a favor de las cooperativas legalmente autorizadas y los provenientes de las pensiones alimenticias a que se refieren los artículos 411 y Concordantes del Código Civil, pero el monto del embargo o retención no puede exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor de la prestación respectiva”, pues “no resulta extraño a la legislación que se dicten normas protectoras del salario de los trabajadores, las cuales, además, encuentran fundamento en el artículo 53 de la Carta Política, en el que se dispone que son irrenunciables ‘los beneficios mínimos establecidos en normas laborales’, se establece la garantía de la seguridad social y se establecen limitaciones a la

contratación con los trabajadores, para que en ningún caso se menoscaben la libertad, la dignidad humana, ni sus derechos fundamentales” (Sentencia C-183 de 1999), de suerte que si en este caso no se está cobrando el crédito a favor de una cooperativa o una deuda alimentaria, no había forma de proceder al decreto de esa medida solicitada.

Y si bien el artículo 598 del código general del proceso dispone que en los “*procesos de nulidad de matrimonio, divorcio, cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, separación de cuerpos y de bienes, liquidación de sociedades conyugales, disolución y liquidación de sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes*”, cualquiera “*de las partes podrá pedir embargo y secuestro de los bienes que puedan ser objeto de gananciales y que estuvieran en cabeza de la otra*” (numeral 1º), es de verse que ni siquiera bajo ese criterio sería posible mantener esa cautela decretada.

Y no sólo porque si el “*régimen de la sociedad conyugal gobierna las relaciones económicas patrimoniales de los casados mientras la sociedad esté vigente, mientras no se disuelva por la ocurrencia de alguno de los motivos que la ley taxativamente ha erigido en causas de la disolución de la sociedad conyugal*”, debe convenirse en que, disuelta, “*ninguno de los cónyuges (...) tendrá desde entonces parte alguna en las ganancias que resulten de la administración del otro*”, pues todos los bienes que adquiera y los salarios y rentas que devengue a partir de ese momento “*serían propios de él y no sociales*” (Cas. Civ. Sent. de 1º de agosto de 1979), lo que significa que ninguna autorización existe para que, so pretexto de la liquidación de la sociedad, se puedan cautelar los salarios y prestaciones sociales que con posterioridad a la disolución devengue alguno de los ex esposos, sino además porque esa medida cautelar cuyo levantamiento se ordenó en el proveído apelado, fue dictada no para efectos de brindar la seguridad que esas medidas del precepto 598 representan para los cónyuges en el propósito de evitar que alguno de éstos enajene o grave los bienes que figuran a su nombre en perjuicio del otro, o, en desmedro de

la sociedad de bienes conformada entre ellos, sino para garantizar el pago dentro de esa muy sui-generis ejecución que dio inicio dentro del trámite liquidatorio, cuya finalidad de las medidas ejecutivas que pueden decretarse es muy distinta, pues estriba en la certidumbre que las mismas representan para los acreedores en el propósito de garantizar el pago de la obligación que es, en últimas, la finalidad del proceso ejecutivo; de ahí que la regla general sea la embargabilidad de los bienes del deudor, la cual, justamente por ello, admite ciertas excepciones que le impiden al juzgador proveer de ese modo, como ocurre en este caso, en que por la naturaleza de esos derechos a afectar, ello no resultaba posible.

Lo dicho hasta ahora es suficiente para confirmar el auto apelado; las costas se impondrán con sujeción a la regla 1ª del precepto 365 del estatuto procesal civil.

III.- Decisión

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil – Familia, confirma el auto impugnado de fecha y procedencia preanotados.

Costas a cargo del recurrente. Tásense por secretaría, incluyendo la suma de \$500.000 por concepto de agencias en derecho.

Oportunamente, vuelva el proceso al juzgado de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase,

Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Firmado Por:
German Octavio Rodriguez Velasquez
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 004 Civil Familia
Tribunal Superior De Cundinamarca - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **23c082e8cc4f6af31b4ad02699a72c51396e8663cef42b7b037e9c8652092fb1**

Documento generado en 15/12/2022 11:46:27 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>